

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°363

Medellín, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto y el grado jurisdiccional de consulta en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora **GLORIA DEL SOCORRO GARCÉS GAVIRIA** contra **COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere de forma escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se declare que es beneficiaria de la sustitución pensional generada con ocasión de la muerte de su cónyuge el señor **Juan José Velásquez Amaya**; y, en consecuencia, se condene a **Colpensiones** a reconocer y pagar la prestación desde el **29 de abril de 2021**, los intereses moratorios o en subsidio la indexación de las condenas.

Hechos

La actora como fundamento de sus pretensiones manifestó que contrajo matrimonio con el señor **Juan José Velásquez Amaya** el día **5 de marzo de 1983**, conviviendo de forma ininterrumpida desde esa fecha, unión de la que nacieron dos hijos a la fecha mayores de edad.

El señor **Velásquez Amaya** fue pensionado por el **ISS** hoy **Colpensiones** mediante la **Resolución N°24004 del 15 de agosto de 2012**.

El pensionado falleció el **29 de abril de 2021**, por lo que el día **28 de mayo de 2021** en calidad de cónyuge se presentó a reclamar la sustitución pensional, prestación que le fue negada mediante la **Resolución SUB 165229 de 2021**, por no acreditar los extremos de convivencia, decisión confirmada a través de la **Resolución SUB 257501 del 5 de octubre de 2021**.

Contestación Colpensiones

La AFP demandada a través de apoderada indicó que son ciertos los hechos, excepto el que tiene que ver con la convivencia, debiendo este aspecto ser probado en el proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, improcedencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, buena fe de Colpensiones, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

Sentencia de primera instancia

La Juez Doce Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **23 de septiembre de 2022**, condenó a **Colpensiones** a reconocer y pagar a la señora **Gloria del Socorro Garcés Gaviria**, la sustitución pensional generada con ocasión del fallecimiento del pensionado **Juan José Velásquez Amaya** a partir del **30 de abril de 2021**, en las mismas condiciones en que fue reconocida la prestación, liquidando el retroactivo a adeudado entre esa fecha y el 30 de septiembre de 2022 en la suma de **\$68'224.469**.

De otro lado, sobre el valor de las mesadas adeudadas reconoció los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, estableciendo que corren desde el **28 de julio de 2021** y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de su importe.

Como fundamento de su decisión, manifestó que una vez valorada la prueba allegada al proceso se advierte que la demandante demostró el requisito mínimo de convivencia con el pensionado para acceder a la sustitución reclamada consistente en 5 años en cualquier tiempo.

Esta decisión no la compartió la apoderada de la parte demandada, motivo por el cual la recurrió en los siguientes términos:

Recurso de apelación Colpensiones

La recurrente solicita que se revoque la sentencia de primera instancia respecto de la imposición de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto solo se demostró la existencia de la convivencia entre el causante y el demandante en el entorno del proceso, pero no fue posible determinarlo dentro del procedimiento administrativo, citando en este sentido la sentencia SL-11897-2016.

En caso de encontrar procedente la condena de primera instancia solicita que se ordene el pago de los intereses moratorios se modifique la fecha de su causación fijándolos corridos tres meses después de la radicación de la reclamación administrativa.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado establecido en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, presentó alegaciones que no se encuentran en consonancia con el aspecto debatido.

CONSIDERACIONES

Problema Jurídico

El problema jurídico a resolver en esta instancia de conformidad con el recurso interpuesto y el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) Establecer si la señora **Gloria del Socorro Garcés Gaviria** demostró la calidad de beneficiaria de la sustitución pensional en calidad de cónyuge del señor **Juan José Velásquez Amaya**; y en caso afirmativo, (ii) Determinar cuál debe ser el valor de la prestación y el retroactivo, (iii) si operó la prescripción, (iv) si proceden los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y (v) cual debe ser la fecha de su causación.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. La señora **Gloria del Socorro Garcés Gaviria** y el señor **Juan José Velásquez Amaya** contrajeron matrimonio el día **5 de marzo de 1983** (03/pág.16).
2. De esta unión nacieron **Juan Camilo** y **Julián Andrés Velásquez Garcés**, el 2 de septiembre de 1983 y el 19 de mayo de 1992, respectivamente (03/págs.18-21).
3. El ISS hoy **Colpensiones** mediante **Resolución 024004 del 15 de agosto de 2012**, le reconoció pensión de vejez al señor **Juan José Velásquez Amaya** en cuantía inicial de **\$2'140.733** a partir del **18 de marzo de 2010** (Exp.Activo/archivo347).
4. Mediante **Resolución GNR 338413 del 28 de octubre de 2015**, el valor de la mesada fue fijado en cuantía superior, estableciéndose que para la fecha del disfrute el valor de la mesada ascendía a **\$2'488.176** (Exp.Activo/archivo315).
5. El señor **Juan José Velásquez Amaya** falleció el día **29 de abril de 2021** (Exp.Activo/archivo271)
6. El día **28 de mayo de 2021**, la señora **Garcés Gaviria** solicitó ante **Colpensiones** el reconocimiento y pago de la sustitución pensional (03/págs.22-24).
7. **Colpensiones** mediante la **Resolución SUB 165229 del 15 de julio de 2021**, negó la prestación argumentando que no fue posible verificar la convivencia con el causante en desarrollo de la investigación administrativa (03/págs.32-36).
8. Esta decisión fue confirmada en la **Resolución SUB 257501 del 5 de octubre de 2021** (03/págs.107-115).

Una vez efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a dar respuesta al problema jurídico propuesto:

Del cumplimiento del requisito de convivencia para acceder a la sustitución pensional

El artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de forma vitalicia “...*el cónyuge o la compañera o*

compañero permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte...”

Referente a la interpretación de esta norma, en lo que respecta con la **sustitución pensional**, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sido enfática en indicar que tratándose de cónyuge de pensionado se debe acreditar una convivencia efectiva de 5 años anteriores al fallecimiento, en este sentido se dijo en la sentencia SL-414 de 2021, lo siguiente:

En efecto, como en el presente asunto es un hecho indiscutido que el causante ostentaba la calidad de pensionado de la demandada Ecopetrol, debe constatarse que las beneficiarias «haya[n] convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte», tal y como lo exige el artículo 13 ibidem y lo ha adocinado esta Corporación (CSJ SL1399-2018). Lo anterior porque la convivencia real y efectiva implica una comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, de modo que se excluyen los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser prolongadas, no generen las condiciones necesarias de una comunidad de vida.

Bajo el anterior horizonte, la demandante debía demostrar que con anterioridad al fallecimiento del señor **Juan José Velásquez Amaya** tuvieron una convivencia superior a 5 años, exigencia que se acreditó con la prueba arrimada al proceso, puesto que, con los testimonios de las señoras **Nora Isabel Velásquez Amaya** y **Amparo del Socorro Velásquez Amaya** (ambas hermanas del causante), se da cuenta de una forma desprevénida y clara que la pareja conformada por el causante y la actora nunca se separó desde la fecha de su matrimonio, existiendo un apoyo y un acompañamiento mutuo hasta la fecha de la muerte del pensionado.

Esta versión por lo demás se corrobora en otros elementos documentales obrantes en el expediente como lo son la condición de beneficiaria en salud de la demandante frente al causante (03/pág.62), la afectación a vivienda familiar de un bien inmueble mediante escritura del 29 de diciembre de 2017 (03/pág.66) y el acompañamiento como acudiente al Hospital el día **10 de**

abril de 2021, cuando el demandante previo a su muerte fue ingresado a la UCRI de la Clínica CES (03/pág.68), pruebas que en su individualidad no arrojan un convencimiento, pero que como elementos sumados conducen a la conclusión de que la demandante satisface el requisito de convivencia para ser beneficiaria de la sustitución pensional reclamada y en ese sentido se **confirmará** la decisión consultada en este aspecto.

Del valor de la mesada y el retroactivo pensional adeudado

Tratándose de una sustitución pensional la misma debe continuarse reconociendo en las mismas condiciones que se le venía haciendo al causante conforme con los lineamientos del artículo 48 de la ley 100 de 1993, lo que implica que la mesada a reconocer a la actora desde el **30 de abril de 2021** asciende a la suma de **\$3'686.653** y efectuados los cálculos del retroactivo hasta el **30 de septiembre de 2022** se encuentra que el valor del mismo asciende a la suma de **\$68.224.469**, como de forma acertada lo concluyó la juez a-quo.

De otro lado, no se advierte que sobre ninguna de las mesadas reclamadas operó la prescripción, puesto que la primera de ellas fue exigible en el mes de mayo de 2021 y la reclamación judicial se radicó el 14 de febrero de 2022 (01), sin que transcurriera entre ambas fecha el término trienal a que hace referencia el artículo 151 del CPT y SS¹.

De la procedencia de la condena al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993

Se solicita por parte de la apoderada de **Colpensiones** que no se imponga el pago de intereses moratorios, toda vez que solo fue en el entorno del proceso donde la parte actora acreditó el cumplimiento del requisito de convivencia para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, lo que no fue posible determinar en el trámite administrativo, por cuanto la demandante no prestó su colaboración para la realización de su entrevista personal.

En lo referente al argumento sostenido por la apoderada recurrente, encuentra la Sala, que la imposibilidad de entrevistarse con la reclamante de la pensión

¹Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.

de sobrevivientes no entraña una circunstancia objetiva para la negación del derecho reclamado, pues precisamente en el trámite de la investigación podía recurrir a otros elementos para determinar la existencia o no de la convivencia, aún más si la misma era necesaria bien se le pudo citar fijándole una fecha y hora para que concurriera a prestar su declaración, máxime cuando se observa que la demandante siempre estuvo atenta a la reclamación de su derecho desplegando los respectivos recursos.

De otro lado, es necesario recordar que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tienen como propósito resarcir al pensionado por el retardo en el pago de la prestación y en tal sentido tienen carácter objetivo, puesto que el elemento fundamental a tener en cuenta para su imposición el retardo en que incurrió la administradora de pensiones.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia ha explicado que existen circunstancias particulares en las cuales no proceden los intereses, a saber: i) cuando existe disputa entre los beneficiarios, ii) la negativa es producto de la interpretación objetiva de la ley vigente y iii) la pensión es reconocida producto de un cambio jurisprudencial.

Una vez revisado el caso sometido a estudio no se advierte que la administradora se encuentre dentro de alguno de los supuestos enlistados, por el contrario, su negativa se sustenta en que, como resultado de su investigación administrativa -en la que ninguna prueba se recolectó-resolvió que no existía convivencia, tesis que fue desvirtuada en desarrollo del presente proceso.

En este punto se debe señalar que la negativa de la prestación fundada en el no cumplimiento del requisito de convivencia no es un elemento por el cual se pueda generar una exoneración del pago de intereses, debiendo en este sentido recordar lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 5259-2021, en la que al respecto indicó:

Frente a los intereses moratorios, basta con advertir que reiteradamente se ha sostenido por la jurisprudencia su carácter resarcitorio dado el reconocimiento y pago tardío de derechos pensionales, resultando por tanto, fútiles aquellos argumentos en torno a que debe eximirse de su imposición atendiendo el actuar de la entidad pagadora con sujeción a que la negativa de la prestación se encontró fundado en criterios de estricta interpretación de la norma al no haber encontrado satisfecho el requisito de la convivencia, de manera que, la apelación en este punto carece de todo sentido, pues, se itera los intereses no responden a un

criterio sancionatorio que pudiese dar lugar a efectuarse un análisis de los motivos o razones asumidos para la nugatoria, en sede administrativa, del derecho pensional reclamado.

Así las cosas, encuentra la Sala que fue acertada la decisión de primera instancia al imponer el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los cuales deberán ser reconocidos por **Colpensiones** luego de transcurridos dos meses de la reclamación pensional² conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 717 de 2001, y como quiera que la señora **Garcés Gaviria** presentó la reclamación el día **28 de mayo de 2021** (03/págs.22-24), la fecha desde la cual se causan es el **28 de julio de 2021**, como con acierto lo concluyó la juez a-quo motivo por el cual se confirmará el fallo apelado.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por la Juez Doce Laboral del Circuito de Medellín, el día **23 de septiembre de 2022**, en el proceso ordinario adelantado por la señora **GLORIA DEL SOCORRO GARCÉS GAVIRIA** contra **COLPENSIONES**.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

² En este sentido se explicó en la sentencia SL-3112-2020, lo siguiente: “Ahora, la Corte también ha precisado que en el caso de las pensiones de sobrevivientes derivadas del sistema general de riesgos laborales, como aquí acontece, es aplicable el término de gracia de dos (2) meses previsto en el artículo 1° de la Ley 717 de 2001, por tanto, los intereses por mora solo se generan dos meses después de radicada la solicitud (CSJ SL, 14 sep. 2010 rad. 36674 y CSL SL, 4 dic. 2012, rad. 39436).”

Radicado: 05001-31-05-012-2022-00066-01
Radicado Interno: P2982222
Asunto: Confirma sentencia

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado: 05001-31-05-012-2022-00066-01
Radicado Interno: P2982222
Asunto: Confirma sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Gloria del Socorro Garcés Gaviria
Demandado	Colpensiones
Radicado	05001-31-05-012-2022-00066-01
Decisión	Confirma sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 24 de noviembre de 2022 a las 8:00am

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 24 de noviembre de 2022 a las 5:00pm